



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, diez (10) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Asunto: Conciliación Prejudicial
Radicación: 15001 3333 004 **2020 00078 00**
Convocante: María Elizabeth Hernández Cárdenas
Convocado: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-

I. ASUNTO

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el acuerdo conciliatorio celebrado por las partes de la referencia el día 18 de marzo de 2020, ante la Procuraduría 122 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja.

II. ANTECEDENTES

La señora María Elizabeth Hernández Cárdenas, quien actúa en mi propio nombre y en representación de su menor hijo Daniel Alejandro López Hernández, a través de apoderado judicial, presentó solicitud de conciliación prejudicial con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 03813 del 16 de septiembre de 2019, mediante la cual la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario decidió trasladar a la convocante a la Reclusión de Mujeres de Pereira, y de la Resolución No. 004412 del 16 de octubre de 2019, por la cual se confirmó la anterior determinación y, en consecuencia, se disponga que la señora Hernández continúe la prestación de servicios en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Cóbbita Boyacá. Asimismo, solicitó el reconocimiento de los siguientes perjuicios:

- Morales: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la convocante y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el menor Daniel Alejandro López Hernández.
- Materiales: \$3.000.000 por concepto de honorarios del abogado.

III. TRÁMITE PROCESAL

La solicitud de conciliación prejudicial fue presentada el 21 de enero de 2020, y correspondió a la Procuraduría 122 Judicial II para Asuntos Administrativos Tunja, quien la admitió, mediante auto de 23 de enero de la misma anualidad, y la respectiva audiencia de conciliación se inició el 25 de febrero de 2020, pero se suspendió a fin de que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad emitiera una nueva certificación que diera cuenta de las razones que estructuraban la propuesta jurídica de conciliación. El 18 de marzo de la presente anualidad se continuó la diligencia logrando el acuerdo que ocupa la atención del Despacho.

IV. ACUERDO CONCILIATORIO

La fórmula propuesta por la entidad convocada se contrae a los siguientes términos:

*“El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, en sesión ordinaria del día 02 de marzo 2020 – Acta 07, estudió la reconsideración en conciliación extrajudicial en medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por **MARÍA ELIZABETH HERNÁNDEZ CÁRDENAS** ante la Procuraduría 122 Judicial Administrativa de Tunja; en la que por votación unánime de sus integrantes se adoptó la siguiente decisión: **RATIFICAR** lo decidido en sesión de 17 de febrero de 2020, aclarando que: - **Se CONCILIA** revocar el Numeral 5.º del Artículo 1 de /a Resolución No. 03813 de 16/09/2019 de la Dirección General del INPEC y el Artículo 2 respecto al reconocimiento económico por prima de instalación u otros del mismo acto administrativo relacionado con la funcionaria **MARÍA ELIZABETH HERNÁNDEZ CÁRDENAS**; con el propósito de no vulnerar de manera alguna, los derechos constitucionalmente protegidos a los convocantes. - **NO CONCILIAR** las pretensiones de índole económico relacionadas en la solicitud de conciliación extrajudicial, ya que no es posible acceder a las mismas, toda vez que la funcionaria no se ha trasladado del Establecimiento de Combita y por tanto no se ha afectado su patrimonio o los derechos protegidos en sede de tutela; por tal razón si el INPEC, realiza algún tipo de reconocimiento económico, posiblemente se configuraría en un detrimento patrimonial, ya que el traslado no se ha materializado”.*

La parte convocante aceptó la propuesta presentada por el apoderado de la Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Por último, el representante del Ministerio Público señaló que, a su juicio, el acuerdo conciliatorio contenía obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo modo y lugar de su cumplimiento, pues cumplía con los requisitos establecidos por la ley para su procedencia y, adicionalmente, no resultaba lesivo para el patrimonio público.

V. CONSIDERACIONES

Tratándose de asuntos de competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la ley prescribe que pueden conciliar, total o parcialmente en las etapas prejudicial o judicial, las personas de derecho público, a través de sus representantes legales o por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económico de que conozca o pueda conocer esta jurisdicción, a través de los medios de control de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias contractuales¹.

El inciso final del art. 73 de la Ley 446 de 1998, que adicionó el art. 65 A de la Ley 23 de 1991, respecto a la aprobación de un acuerdo conciliatorio establece lo siguiente:

¹ Tribunal Administrativo de Boyacá; MP. Clara Elisa Cifuentes Ortiz; 17 de mayo de 2017.

“La autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello, sea violatorio de la ley o resulte lesivo para el patrimonio público”.

De acuerdo con este contexto, el Despacho examinará los siguientes presupuestos para la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio:

1. Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81 Ley 446 de 1998)

En el caso concreto, se advierte que el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad profirió fallo el **12 de noviembre de 2019**, dentro de la acción de tutela 2019-00089, mediante el cual amparó, como mecanismo transitorio, los derechos fundamentales a la vida digna, salud, familia y de los niños, de la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas y, en consecuencia, ordenó al director general del instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —INPEC- suspender los efectos de la Resolución N.º 003813 del 16 de septiembre de 2019; de igual manera, advirtió a la convocante que debía instaurar la demandada de nulidad y restablecimiento del derecho, en un término máximo de cuatro meses a partir del fallo de tutela.

En tal virtud, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación de radicó el **21 de enero de 2020**, es claro se presentó dentro de los cuatro meses establecidos por el juez de tutela, por lo que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad.

2. Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes

En el caso bajo examen, se tiene que la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas se encuentra vinculada al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, como profesional universitaria código y grado 2044-09 y presta sus servicios en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Cúmbita. No obstante, la Dirección General del INPEC, mediante Resolución N.º 03813 de 16 de septiembre de 2019, ordenó su traslado a la Reclusión de Mujeres de Pereira, decisión contra la cual interpuso recurso de reposición, resuelto desfavorablemente por medio de la Resolución N.º 004412 del 16 de octubre de 2019.

Ante tal situación, la parte convocante instauró acción de tutela, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, autoridad que mediante fallo de 12 de noviembre de 2019, como mecanismo transitorio, amparó los derechos fundamentales a la vida digna, salud, familia y de los niños de la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas, al considerar que:

“...se trata de madre cabeza de familia desde el asesinato de su compañero sentimental —situación no desvirtuada por la entidad accionada y que contrario sensu halla probada el despacho en las presentes diligencias de amparo con los diversos medios de prueba allegados por la interesada-, respecto de la que fue ordenado su traslado de lugar de prestación de servicios personales por parte del INPEC, del reclusorio de Combita al de Pereira sin respetar las reglas inmersas en el MANUAL PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL INPEC, el cual a pesar de incluir como modalidad para el mismo NECESIDAD EN EL

SERVICIO, Reglamenta textualmente para su realización que "...se evitará el traslado por necesidad del servicio de funcionarios Padres o madres cabeza de familia...", y además sin tener en cuenta la entidad accionada al emitir la decisión bajo reproche la particular situación de salud de la servidora y su descendiente -la cual fue puesta en su conocimiento a través del recurso de reposición impetrado contra el acto administrativo que resuelve trasladarla, así como la pérdida incalculable del apoyo moral y psicológico que recibe la tutelante y su descendiente por parte de su progenitora y abuela materna luego de perder a su pareja en un acto violento, situación que ha lesionado la psiquis de los integrantes del hogar y que empeoró con la noticia del traslado, desencadenado trastorno psicológico para los miembros del núcleo familiar según da cuenta las historias clínicas que reposan en las diligencia...

(...)

"...demostrándose de contera con la decisión unilateral de la administración un verdadero peligro para la salud de la accionante y su hijo, así como una circunstancia familiar de excepcionales características, base fundamental para considerar el mecanismo jurídico de amparo como apto para oponerse al ejercicio legítimo del ius variandi por parte de la autoridad penitenciaria. Es pertinente acotar, que la posible existencia de acción disciplinaria en curso contra la tutelante tal y como deja entrever material de convicción relacionado ut-supra, tampoco puede ser fundamento exclusivo para emitir determinación de traslado de reclusorio para prestar sus servicios personales, mucho menos desconociendo palmariamente la realidad personal de la funcionaria, la cual contrario sensu lleva a colegir que por el momento no es factible disponer su variación de lugar de trabajo, no siendo posible oponer situaciones administrativas a los derechos constitucionales fundamentales de la accionante y su familia...."

En consecuencia, el juez de tutela ordenó al director general del instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC suspender los efectos de la Resolución N.º 003813 de 16 de septiembre de 2019, mientras la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas acudía a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, con el fin de obtener la nulidad de tales los actos administrativos.

Posteriormente, al momento de celebrarse la audiencia de conciliación prejudicial, el Comité de Conciliación y Defensa Jurídica de la entidad convocada propuso acuerdo conciliatorio, en el sentido de revocar tanto el numeral 5.º del artículo 1.º como el artículo 2.º de la Resolución N.º 03813 de 16 de septiembre de 2019, relativos a la reubicación laboral de la señora Hernández Cárdenas y el reconocimiento de la prima de instalación *"con el propósito de no vulnerar de manera alguna, los derechos constitucionalmente protegidos a los convocantes"*; sin embargo, indicó que no conciliaría las pretensiones de índole económico, en la medida que no materializó el traslado de la funcionaria desde el Establecimiento de Cómbita al Reclusorio de Pereira, y no se ocasionó ningún perjuicio; condiciones que fueron aceptadas por el apoderado de los convocantes.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el acuerdo conciliatorio no versa propiamente acerca de acciones o derechos económicos disponibles por las partes, sino

sobre otros efectos derivados del numeral 5.º del artículo 1.º y del artículo 2.º de la Resolución N.º 03813 de 16 de septiembre de 2019. Valga señalar que la conciliación prejudicial en materia de actos administrativos es viable respecto a los efectos patrimoniales y no sobre su legalidad, en la medida que este es un estudio que corresponde al juez de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Al respecto, recuérdese que este requisito de procedibilidad se introdujo a través de la Ley 1285 de 2009², cuyo proyecto fue objeto de revisión previa, mediante la Sentencia C-713 de 2008³. En dicha oportunidad, la Corte Constitucional consideró válido que se hiciera extensiva la exigencia de la conciliación prejudicial a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que dentro de la misma **se discuten intereses de contenido particular y subjetivo, generalmente de orden patrimonial**, y no la legalidad o constitucionalidad en abstracto.

En este entendido, pueden conciliarse los efectos de las decisiones de la administración que, habitualmente son de carácter económico; sin embargo, a juicio de esta Instancia Judicial, tales efectos no son los únicos y, en casos excepcionales, la conciliación puede versar sobre intereses o derechos particulares y subjetivos distintos a los de orden patrimonial, en la medida que los actos administrativos crean, modifican o extinguen situaciones particulares y concretas de la parte convocante.

El caso concreto es un ejemplo en el que figura un efecto del acto administrativo distinto al de contenido económico, comoquiera que la decisión de la entidad convocada se dirige a trasladar a la convocante hacia la ciudad de Pereira, quien, si bien puede conservar los derechos salariales y prestacionales correspondientes al cargo desempeñado, lo cierto es que como consecuencia del traslado habrá de sufrir una modificación en las condiciones de prestación del servicio por el cambio de lugar, con las consecuentes repercusiones en la vida personal, familiar y social. Por tanto, si la entidad retrotrae su decisión, mediante la revocatoria directa del acto administrativo, el restablecimiento del derecho consistirá en conservar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio en el municipio de Cómbita – Boyacá, sin que medie ningún reconocimiento económico, en virtud de que el acto administrativo no se ejecutó por efecto de la orden judicial de tutela y no se causó ningún tipo de erogación para la convocante o la entidad.

Al examinar el acuerdo conciliatorio, el Despacho considera que, en estricto sentido, la propuesta de arreglo del INPEC consistió en una oferta de revocatoria directa, figura jurídica que, por regla general, es concebida como una facultad de la Administración para revocar sus propios actos en sede administrativa, y que fue presentada en la oportunidad establecida por el artículo 95 del CPACA, esto es, antes de que se haya notificado el auto admisorio del medio de control ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Con relación a la causal de revocatoria, según la solicitud de conciliación y el acuerdo logrado, a pesar de que la entidad convocada no la señaló expresamente, puede extraerse que corresponde a aquella prevista en el numeral 3.º del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011⁴, comoquiera que con la expedición de las Resoluciones 03813 y

² "Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia"

³ En la que se llevó a cabo la revisión previa del proyecto de ley estatutaria No. 023/06 Senado y No. 286/07 Cámara "por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia"

⁴ "3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."

00412 de 2019 se causó un agravio injustificado a la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas y a su hijo menor Daniel Alejandro López Hernández.

Este aserto halla justificación en la motivación del juez de tutela para amparar los derechos fundamentales de la convocante y de su menor hijo, según la cual, la decisión adoptada por la entidad desconoció su propio manual de traslado de personal, que dispone evitar el traslado de los funcionarios padres o madres de familia, lo que de contera vulneró sus derechos fundamentales a la salud, vida en condiciones dignas y unidad familiar, pues no respetó los límites establecidos por la Corte Constitucional⁵ para el ejercicio del *ius variandi*, ya que no tuvo en cuenta las especiales circunstancias que rodeaban en núcleo familiar de la convocante ni las afecciones psicológicas que padecían, en especial, las diagnosticadas al niño Daniel Alejandro, sujeto de especial protección constitucional.

Bajo el anterior panorama, se estima que la fórmula de arreglo contiene una verdadera oferta de revocatoria del acto administrativo, consistente en dejar sin efectos el numeral 5.º del artículo 1.º y el artículo 2.º de la Resolución N.º 03813 de 16 de septiembre de 2019, mediante los cuales se ordenó el traslado de la señora María Elizabeth Cárdenas Hernández a la Reclusión de Mujeres de Pereira y el consecuente reconocimiento de la prima de la prima de instalación, lo que implica necesariamente el restablecimiento de un derecho personal y subjetivo, esto es, que la convocante continué con la prestación personal del servicio en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cúmbita; además, esta propuesta fue presentada oportunamente, pues se efectuó antes de iniciar el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y cuenta con la aprobación previa del Comité y Defensa Jurídica del INPEC.

3. Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar

La señora María Elizabeth Hernández Cárdenas se encuentra representada judicialmente por el abogado Duver Alirio Gómez Toro, quien, según poder obrante en el archivo que contiene la solicitud de conciliación (hojas 4 a 5), cuenta con facultad expresa para conciliar y reconocimiento de personería para actuar, en auto de 23 de enero de 2020.

A su vez, la entidad convocada se encuentra debidamente representada, a través del abogado Álvaro Andrés Mendoza Rojas, según poder otorgado por la directora general del INPEC, a quien se le otorgó facultad para conciliar, de conformidad con el acta del Comité de Conciliación y le fue reconocida personería para actuar en la diligencia de 25 de febrero del presente del año.

En este orden, las partes se encontraban debidamente representadas y facultadas para participar en la audiencia de conciliación celebrada el 18 de marzo de 2020.

⁵ En la sentencia T-751 de 2010, el Alto Tribunal indicó que para trasladar a un empleado deben considerarse: "(i) las circunstancias que afectan al trabajador; (ii) la situación familiar; (iii) su estado de salud y el de sus allegados; (iv) el lugar y el tiempo de trabajo; (v) las condiciones salariales; y (vi) el comportamiento que ha venido observando y el rendimiento demostrado".

4. Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea violatorio de la ley o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A Ley 23 de 1991 y art. 73 Ley 446 de 1998)

En la solicitud de conciliación obran los siguientes medios de prueba relevantes:

- ✓ Resolución 005716 de 16 de noviembre de 2016, mediante la cual se inscribió a varios servidores en el escalafón de la Carrera Penitenciaria y Carcelaria, entre ellos, a la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas en el cargo de profesional universitario, código 24405.
- ✓ Solicitud de 1.º de septiembre de 2016 formulada por la convocante para el traslado del Establecimiento Penitenciario de Guateque al EPAMSCAS de Cómbita, debido a calamidad familiar, toda vez que su esposo fue asesinado de manera violenta, situación que desencadenó en su hijo, quien convivía con la abuela en Tunja, comportamientos que llevaron a que un profesional en psicología recomendara que la señora Hernández Cárdenas retomara la crianza a tiempo completo del menor.
- ✓ Resolución N.º 004726 de 28 de septiembre de 2016, *“por la cual se causan unas novedades de personal administrativo del INPEC”*
- ✓ Resolución N.º 003813 de 16 de septiembre de 2019, por la cual se efectuaron varios traslados laborales, entre ellos, el de la señora María Elizabeth Hernández del EPAMSCAS de Cómbita a la Reclusión de Mujeres en Pereira.
- ✓ Escrito de 23 de septiembre de 2019, por medio del cual la convocante interpuso recurso de reposición contra la Resolución N.º 003813 de 16 de septiembre de 2019, el cual sustentó el 7 de octubre de la misma anualidad, poniendo en conocimiento de la Administración su condición de madre cabeza de familia, toda vez que su esposo fue asesinado y los padecimientos que tanto ella como su hijo padecían de quebrantos en su salud emocional, por lo que estaban acudiendo a terapias por psicorientación, en las que recomendaron mantener la unidad familiar.
- ✓ Resolución N.º 004412 de 16 de octubre de 2019, por medio de la cual se resolvió el mentado recurso de reposición confirmando lo ordenado mediante Resolución N.º 03318 del 16 de septiembre de 2019.
- ✓ Copia del fallo proferido el 12 de noviembre de 2019, por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Tunja, dentro de la acción de tutela N.º 2019-00089 incoada por la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
- ✓ Historia Clínica de la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas, en la que consta la atención que ha recibido por la especialidad de psicología y se indica que padece problemas de tensión física o mental relacionadas con el trabajo, por lo que, entre otras recomendaciones, se señala que debe mantenerse cerca se red de apoyo familiar, fortalecer vínculos afectivos en núcleo familiar.
- ✓ Historia Clínica del menor Daniel Alejandro López Hernández, en la que consta ha recibido atención por la especialidad de psicología y que padece trastornos emocionales, por lo que debe continuar asistiendo a terapias.
- ✓ Copia del manual para el traslado del personal del INPEC.
- ✓ Registro civil de nacimiento del menor Daniel Alejandro López Hernández.
- ✓ Registro civil de defunción del señor Jairo Ricardo López Pantoja.
- ✓ Resolución N.º 001395 de 27 de marzo de 2020, mediante la cual el director general del Instituto Nacional Penitenciario revocó el numeral 05 del artículo 1.º

de la Resolución N.º 003813 del 16 de septiembre de 2019, dejó sin efectos jurídicos la resolución N.º 004412 de 16 de octubre de 2019, y ordenó al grupo de presupuesto del INPEC, anular del registro presupuestal N.º 1013619 del 25 de septiembre de 2019.

Con sustento en lo anterior, el Juzgado encuentra acreditados los hechos narrados en la solicitud de conciliación, en tanto permiten establecer que el INPEC, en ejercicio de sus facultades, ordenó el traslado de la convocante del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cómbita al Reclusorio de Mujeres de Pereira, y que si bien la discrecionalidad para reubicar a sus servidores dentro de la planta global del Instituto, de acuerdo a las necesidades del servicio, corresponde a una manifestación del *ius variandi*, consistente en la facultad del nominador de modificar las condiciones en la prestación del servicio, su decisión no podía resultar desproporcionada y desatender la realidad de quien ocupa el cargo reubicado.

En este sentido, conviene señalar que la reubicación del empleo ocupado por la convocante, pese a que se fundamentó en estrictas necesidades del servicio, no tuvo en cuenta el estado de salud de la misma ni las especiales condiciones de su núcleo familiar, en especial de su hijo menor Daniel Alejandro López, quien, al sufrir trastornos emocionales, se encontraba en tratamiento psicológico y necesita el apoyo de su madre; además, en el caso particular, la entidad convocada conocía la condición de madre de cabeza de familia de la señora Hernández Cárdenas, pues ella fundamentó la solicitud de traslado del Centro Penitenciario de Guateque al de Cómbita, en la muerte violenta de su esposo y las secuelas que este desafortunado hecho tuvo en la salud mental de su hijo; situaciones que reiteró en el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución N.º 003813 de 16 de septiembre de 2019, de manera que las mencionadas condiciones debieron tenerse en cuenta por la entidad, al momento de adoptar la decisión de reubicar su empleo en la ciudad de Pereira.

Por consiguiente, si bien la reubicación cuestionada respetó la remuneración salarial, las funciones y requisitos para el desempeño del mismo, la medida resultó ser desproporcionada, comoquiera que desconoció las condiciones del núcleo familiar de la trabajadora, así como su estado de salud y el de su hijo Daniel Alejandro López Hernández, generándole condiciones menos favorables, de tal manera que no se reunieron los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional para que el ejercicio del *ius variandi* no afecte derechos fundamentales del trabajador.

Valga recordar que, en materia de *ius variandi*, la Corte Constitucional fijó su doctrina a partir de la sentencia T-407 de 1992⁶, en la que se hizo explícito el conflicto de derechos que se presenta: “De una parte, el derecho del empleador (ejercicio del *ius variandi*) frente al derecho que tiene el empleado a un trabajo en condiciones dignas y justas. En esta providencia, la Corte fijó la regla de la prohibición categórica del empleador de atentar contra la dignidad de sus empleados⁷.”

Además, de acuerdo con el artículo 25 constitucional, el trabajo como derecho fundamental y como obligación social goza en todas sus modalidades de una especial protección del Estado, que significa la garantía de su realización en condiciones dignas y justas. Por ello, comoquiera que la facultad del *ius variandi* no puede ser

⁶ M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.

⁷ T-482 de 2017

absoluta, el empleador está en la obligación de verificar en cada caso las condiciones del trabajador, y no adoptar decisiones arbitrarias bajo la justificación de las necesidades del servicio.

5. De la no afectación al patrimonio público

Con relación a este aspecto, el Consejo de Estado ha expresado que *“En tratándose de materias administrativas contenciosas para las cuales la ley autoriza el uso de este mecanismo, dado el compromiso del patrimonio público que les es inherente, la ley establece exigencias especiales que deben tomar en cuenta el juez a la hora de decidir sobre su aprobación. Entre dichas exigencias, la Ley 446 de 1998, en el último inciso del art. 73, prescribe que el acuerdo conciliatorio debe estar fundado en “las pruebas necesarias” que permitan deducir una alta probabilidad de condena contra el Estado-en el evento de que el interesado decidiese ejercitar las acciones pertinentes-, de modo tal que lo acordado no resulte lesivo del patrimonio público o violatorio de la Ley (...)”⁸.*

Al respecto, debe considerarse que la parte convocante renunció a los perjuicios materiales y morales solicitados y que el Instituto Nacional Penitenciario INPEC cumplió el acuerdo conciliatorio bajo estudio, incluso, antes de la aprobación judicial, pues reposa la Resolución N.º 001395 de 27 de marzo de 2020, expedida con posterioridad a la celebración de la audiencia de conciliación; mediante este acto administrativo el director general del Instituto Nacional Penitenciario procedió a materializar la fórmula de arreglo propuesta, es decir, que revocó el numeral 05 del artículo 1.º de la Resolución N.º 003813 del 16 de septiembre de 2019, que ordenó el traslado por necesidad del servicio de la servidora pública María Elizabeth Hernández Cárdenas; dejó sin efectos jurídicos la resolución N.º 004412 de 16 de octubre de 2019, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución No. 003813 de 2019, y ordenó al grupo de presupuesto del INPEC anular del registro presupuestal N.º 1013619 del 25 de septiembre de 2019, con el cual realizó el compromiso de gasto para el reconocimiento y pago de viáticos de los funcionarios en comisión, reconocidos a favor de la convocante; por consiguiente, no se produjo perjuicio alguno al erario.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

RESUELVE

PRIMERO.- Aprobar el acuerdo conciliatorio contenido en el acta de conciliación de 18 de marzo de 2020, celebrado entre la señora María Elizabeth Hernández Cárdenas, identificada con la cédula de ciudadanía N.º 3.369.392, en nombre propio y en representación de su menor hijo Daniel Alejandro López Hernández y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, ante la Procuraduría 122 Judicial II para Asuntos Administrativos de Tunja, consistente en *“revocar el Numeral 5º del Artículo 1.º de la Resolución No. 03813 de 16/09/2019 de la Dirección General del INPEC y el Artículo 2 respecto al reconocimiento económico por prima de instalación u otros del*

⁸Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, CP Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Expediente No. 85001233100020030009101, veintinueve (29) de enero del dos mil cuatro (2004).

mismo acto administrativo relacionado con la funcionaria MARÍA ELIZABETH HERNÁNDEZ CÁRDENAS...”

SEGUNDO.- En firme la presente providencia, expídanse copias auténticas de la misma y del acta de conciliación respectiva con destino a las partes, de conformidad al artículo 114 del CGP, y en los términos del Acuerdo PSAA16-10458 de 12 de febrero de 2016.

TERCERO.- Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente con las constancias y anotaciones de rigor.

Notifíquese⁹ y cúmplase

Firmado Por:

**ANGELA MARIA JOJOA VELASQUEZ
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 004 ADMINISTRATIVO DE TUNJA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:
e33481aea880e4c71fded3ee1e8f77387ccb5df0d15924968165c462919facaf
Documento generado en 10/09/2020 09:16:47 a.m.

<p>Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>La anterior providencia se notifica por estado electrónico N.º 27 de hoy 11 de septiembre de 2020, a las 8:00 a. m.</p> <p>FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario</p>
